

F-9

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

TRIBUNAL EN PLENO

Sesión del martes 23 de mayo de 1989.

PRESIDENTE: Sr. Ministro Licenciado
Carlos del Río Rodríguez.

ASISTENCIA: Sres. Ministros Licenciados
Carlos de Silva Nova,
Ignacio Megaña Cárdenas,
Salvador Rocha Díez,
Samuel Alba Leyva,
Meriano Azuela Guitrón,
Noé Casteñón León,
Felipe López Contreras,
Luis Fernández Doblado,
Francisco Pavón Vasconcelos,
Victoria Adato G. de Ibarra,
Santiago Rodríguez Roldán,
José Martínez Delgado,
Jorge Cerpizo,
Atenasio González Martínez,
José Manuel Villegordos L.,
Fausto Morenos Flores,
Ángel Suárez Torres,
Sergio Hugo Chapital G.,
Juan Díez Romero y
Ulises Schmill Ordóñez.

SALA AUXILIAR:

Martha Chávez Padrón,
Irma Cué Sarquís,
Clementina Gil de Lester y
Carlos García Vázquez.

Principió la sesión a las 13:25 hrs.

EL M. PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Está a la consideración de los señores Ministros el acto de la sesión pública anterior, que es la pública número 26, celebrada el martes 9 de mayo de - - 1989.

Si no hubiere objeciones, se consulte si en votación económica se apruebe.

APROBADA.

Señores Ministros, someto a su consideración la conveniencia de alterar la lista de los asuntos fijados para ver el día de hoy, para que el asunto listado en cuarto lugar, 2159/8, se vea en primer término, en segundo término el amparo en revisión 1780/88, en tercer término el amparo 1793/88, en cuarto término el amparo en revisión 143/89 y en quinto el amparo en revisión - -

1

1564/88, y nada más dejar la lista hasta este amparo en revisión 1564/88.

¿Están conformes, señores Ministros? Tome nota, señor secretario. De cuenta con el amparo en revisión 2159/88.

EL C. SECRETARIO: Sí, señor Presidente.

2159/88.- AMPARO EN REVISION promovido por Francisco de Icaza Dufour contra actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de las Leyes de Hacienda y de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1988, ambas del Departamento del Distrito Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1987, concretamente en cuantos sus artículos del 45/G al 45-I y 1o. fracción I, inciso 6).

La ponencia es del señor Ministro Schmall Ordóñez, en el sentido de que se modifique la sentencia recorrida, en la materia de la revisión, se sobresea en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados al Jefe y el Tesorero del Departamento del Distrito Federal, precisados en el resultado primero de esta ejecutoria y se concede el amparo a la quejosa respecto de los actos de las autoridades que se indican.

EL M. PRESIDENTE: Está a discusión el proyecto.

Tiene la palabra el señor Ministro Roche Díaz.

EL M. ROCHA DIAZ: Gracias, señor Presidente.

Señores Ministros, en primer lugar, quiero expresar una entusiasta felicitación al señor Ministro Schmall Ordóñez y a su secretario Maldonado Lere, por el magnífico estudio que contiene el proyecto que se nos somete a consulta, en el cual se analizan conceptos de violación apoyados en el principio de legalidad tributaria y en el principio de proporcionalidad y equidad. Pedí el uso de

le pelee, porque, no obstante que coincide con las argumentaciones que en la mayor parte de los temas nos plantea el señor Ministro Schmill, discrepo de un punto fundamental que sustenta los resolutivos del proyecto. Me permitiría, dividir en aras de la brevedad de mi intervención en dos puntos fundamentales: Por una parte, aquellos que se refieren al marco constitucional del sistema tributario mexicano, y en segundo lugar, los relativos específicamente a los puntos que plantea en la consulta.

En primer lugar, debemos tener presente que el legislador ordinario, tiene plenas plenas facultades constitucionales para seleccionar el hecho imponible que la vida económica y social de México revela como el más adecuado para integrar un sistema impositivo, que cumple con los principios básicos de todo sistema impositivo y que permite la flexibilidad, la integración de los diversos medios de los que legítimamente debe hacer el Estado para afrontar los gastos públicos. Esta Suprema Corte no tiene facultades constitucionales para diseñar un sistema impositivo, esta es una responsabilidad que en nuestra Carta Magna está asignada fundamentalmente al poder legislativo, quien ordinariamente actúa a iniciativa del poder ejecutivo y por ende, ellos son los responsables, estos dos poderes, del diseño más justo de un sistema impositivo para nuestro país.

Esta Suprema Corte, tiene la alta encomienda de vigilar y cuidar que el poder legislativo conserve su conducta dentro de los marcos que señale nuestra Carta Magna, sin que en modo alguno tenga la responsabilidad de

diseñar, insisto, de diseñar un sistema impositivo, ni de pronunciarse sobre cuál es el mejor hecho imponible, de acuerdo con nuestra realidad ^{socio} económica y ver que el mejor hecho imponible seleccionado por el legislador, se encuentra dentro de los límites que la Constitución señala.

El legislador ordinario, tiene dos clases de limitaciones básicas: una, la limitación consagrada en el artículo 31, fracción IV y que se ha venido expresando en los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Debemos reconocer que tenemos poco material orientador respecto al alcance que el Constituyente del 17 y su antecedente en el 57, quisieron dar a esa feliz expresión, que todos los mexicanos estemos obligados a contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa que consignan las leyes. Ha sido y debe ser reconocida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de precisar el alcance de estas limitaciones constitucionales para el legislador ordinario, darle un contenido específico al principio de legalidad, darle un contenido al principio de proporcionalidad y al de equidad. Tenemos, además, las limitaciones que muy claramente ha establecido nuestra jurisprudencia definida, en el sentido de las contenidas en la reserva expresa para determinadas materias de la Federación, artículo 73, fracciones X y XXIX, y las restricciones establecidas a la potestad tributaria de los estados. Dentro de este marco constitucional, es que nuestro legislador ordinario selecciona el hecho imponible y plantea las maneras en que debemos contribuir a los gastos públicos. El principio de legalidad, ha sido definido por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación y señale que la ley o que en la ley, no solamente debe contenerse el impuesto, sino que además, debe señalarse con precisión el sujeto, el objeto, la base, la base, la época de pago y todas las demás características necesarias, para que el contribuyente no se encuentre expuesto a la actividad arbitraria de la autoridad administrativa, sino que su obligación tributaria se encuentre definida en sus características esenciales por la propia ley. En relación a este principio de legalidad, se han presentado cuestionamientos, la Corte lo ha ido precisando y afinando, notizando en algunos casos, tuvimos no hace mucho la oportunidad de aprobar y votar un proyecto del señor Ministro Mariano Azuela Guitrón, en el cual la legislación del Estado de Baja California, propone una forma que este Tribunal consideró constitucional, para determinar el monto de impuestos relativos a obras, a la ejecución y costo de obras en Baja California, con un sistema de democracia participativa, en la cual los propios contribuyentes podrían definir, junto con la autoridad, la manera de contribuir a los gastos públicos y se consideró que esta forma no violaría el principio de legalidad. Hemos, pues, avanzado en la precisión y determinación del principio de legalidad, hemos avanzado igualmente en darle al principio de proporcionalidad, un contenido específico y esta Suprema Corte ha señalado que la proporcionalidad se respeta si el impuesto se base en la capacidad económica y por ende contributiva del sujeto. A este respecto, hemos discutido el concepto de capacidad contributiva económica y hemos discutido si determinados indicadores económicos son o no compatibles con el principio de proporcionalidad

que contiene nuestra Constitución. Sin embargo, podemos constatar que en nuestro sistema fiscal, y habiendo en algunos casos, habiéndose pronunciado este alto Tribunal por su constitucionalidad, tenemos impuesto que tomen como indicador de la capacidad contributiva del sujeto, la riqueza o patrimonio activo, en ese caso el impuesto predial, tenencia de vehículos, el consumo, como es el IVA, el impuesto sobre espectáculos públicos, el gasto, como es el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto en la adquisición de inmuebles, el ingreso, como es en el caso del impuesto sobre loterías y concursos, el impuesto del uno por ciento de remuneraciones cuando esté a cargo del trabajador, el volumen de producción de bienes, el impuesto especial sobre producción y servicios, y desde luego la renta o utilidad neta y aquí siguiendo lo que la propia doctrina de derecho financiero no aporte en hacer distinguos entre impuesto directos e indirectos, reales o personales, impuestos intermedios en el proceso económico de impuestos finales, siempre bajo el principio de la humanidad. En este caso, uno de los puntos a que más adelante me referiré y que constituye uno de los puntos centrales del proyecto del señor Ministro Schmill, tenemos frente a nosotros la necesidad de definir si el monto de las remuneraciones o servicios personales es o no un indicador de la capacidad contributiva del sujeto si es un indicador confiable para los efectos de considerarlo como respetando el principio de proporcionalidad.

Esta suprema Corte ha fijado realmente el contenido del principio de equidad y ha señalado que la ley de tratamiento igual a quien se encuentra en igualdad de

TRIBUNAL EN PLENO.
23 mayo 1989.

7

Primer turno.
Morales-García.

circunstancias dentro de la hipótesis normativa y un tratamiento desigual a quien se encuentre en desigual circunstancia, con lo cual se satisface este principio.

Pero estos principios, que repito, no se encuentran definidos dentro de nuestras normas constitucionales,.....

(Sigue segundo turno).

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

... en cuya relación no tenemos aportación de nuestros constituyentes en los debates correspondientes o en -- los antecedentes constitucionales han definido en preceptos en una labor jurisprudencial que la sociedad mexicana debe reconocerle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación puesto que esa precisión siempre ha ido -- encaminada a la adecuada protección del contribuyente mexicano frente a la necesidad apremiante, a veces desbordada en hechos de la autoridad administrativa al proponerle al Congreso impuestos que podrían violentar estos principios y el Congreso hace aprobar y eso ha correspondido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación encausar la labor del legislador ordinario en la materia impositiva para que se logre el pleno respeto del derecho de los mexicanos y es así como llegamos a un impuesto que si bien reconoce algunos antecedentes en la legislación de algunos de nuestros estados se presenta -- como altamente polemico en la comunidad del Distrito Federal que es este impuesto del 2% llamado sobre nóminas o impuesto al monto de las remuneraciones pagadas por -- servicios personales y en el afán legítimo del mexicano por defenderse de un nuevo impuesto, un impuesto que le resulta en alguna medida novedoso o excepcional porque -- no se encuadra dentro de los criterios que habían prevalecido sobre otros hechos imponibles y en cuya relación este Alto Tribunal se había pronunciado y nos proponen los quejosos una materia variada de conceptos de violación, respecto de este impuesto, podemos considerar que en el proyecto que se nos somete a consulta -- el señor Ministro Ponente hace un estudio profundo, -- serio y en mi opinión correcto respecto del concepto

DE VIOLACION Expresado por el quejoso fundado en el principio de legalidad al considerar que la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal en sus artículos 45 y las letras correspondientes no satisfacen el principio de legalidad toda vez que en los preceptos impugnados no se precisa lo que debe entenderse por salarios o relación laboral, por prestaciones, etc., lo cual lo expone a la actuación arbitraria de la autoridad recaudadora; el señor Ministro Schmill hace un estudio serio, integral del orden jurídico nacional y llega a la conclusión de que no es necesario que la ley fiscal correspondiente o las normas fiscales correspondientes entren a dar una definición de instituciones o situaciones jurídicas que están siendo definidas por otros ordenamientos que integran en su conjunto nuestro orden jurídico nacional y en consecuencia llega a la conclusión de que deben declararse infundado un concepto de violación expresado en este sentido, igualmente lo hace en relación al concepto de violación expresado sobre las erogaciones en especie pagadas a quienes prestan los servicios; el quejoso invoca que al no precisarse la manera de valuación de las erogaciones en la especie dadas a los trabajadores se coloca en una situación de incertidumbre jurídica y expuesto a una actuación arbitraria de la autoridad recaudadora, el señor Ministro Schmill estudiando claramente y con un preciso criterio jurídico y en lo económico llega a la conclusión de que este concepto de violación es infundado toda vez que el prestador del servicio, el patrón, tiene conocimiento exacto del costo que le representan estas erogaciones en especie que hace a favor de sus trabajadores, debe darles un registro contable, adecuado y siempre está en la

posibilidad de evaluar en primer lugar el monto de -
lo que esta le reporta para hacer el pago correspon-
diente, el concepto de violación expresado en relación
a que los preceptos impugnados carecen de certeza en -
relación a la territorialidad en donde debe aplicarse
el impuesto puesto que dispone que son sujetos las per-
sonas físicas o morales que realizan las erogaciones -
sin precisarse si son domiciliadas en el Distrito Fede-
ral o trabajadores en el interior de la república, o -
bien patrones domiciliados en el Distrito Federal o en
el interior de la república es igualmente muy bien es-
tudiado en el proyecto que se somete a consulta y lle-
ga a la conclusión de que el concepto de violación es
infundado toda vez que el precepto fiscal analizado alu-
de a cuál es el principio territorial que será el Dis-
trito Federal y por las erogaciones pagadas en el pro-
pio Distrito Federal, no quisiera abundar en relación
a las argumentaciones que están sintetizadas en el pro-
yecto para defecto de no cansar su atención pero sí con-
sidero que es importante hacer esta presentación para -
los efectos de llegar al punto total de proyecto, en
el punto total del proyecto el señor Ministro Schmill
sostiene que el principio de proporcionalidad exige -
que entre el hecho imponible y la capacidad contribu-
tiva del sujeto exista una relación directa que no ad-
mita excepción alguna, es decir, que del supuesto nor-
mativo necesariamente se desprenda la posibilidad de -
pagar el impuesto correspondiente sin que quepa excep-
ción de ninguna naturaleza llevaría así el señor Minis-
tro ponente a una nueva precisión del principio de -
proporcionalidad que solamente alude a la relación -
que se guarda entre el hecho imponible y la capaci-
dad contributiva del sujeto pero él exige en su pro-

que dé la certeza de que el pago del impuesto pueda ser hecho y no admite excepción alguna, esta propuesta del señor Ministro Schnill revela una preocupación sana, revela una situación sobre la necesidad de darle al principio de proporcionalidad una mayor precisión de la que en el pasado esta Suprema Corte le --
dio y dado que en la vida económica de México se complica y se hace necesario que no se deje una avenida abierta al legislador ordinario para que cualquier --
hecho con relevancia económica pueda ser considerado como un hecho imponible dentro de los marcos constitucionales; discrepo de la propuesta del señor Ministro, comparto la preocupación, sin embargo viéndolo en concreto respecto del monto de las remuneraciones que una persona paga por servicios que le son prestados me permito considerar que toda teoría económica --
reconoce que el trabajo ajeno, que el trabajo contratado contratado aporta necesariamente un valor a --
quien lo contrata que esto es un hecho reconocido, no solamente por la teoría económica sino por la --
realidad económica independientemente de que un mal administrador pueda eventualmente incurrir en la deficiencia administrativa de contratar personal excesivo o innecesario que lleve a una improductividad que lo lleve a la ruina económica pero este es un --
caso de excepción fundado en una negligencia necesariamente del administrador toda vez que la teoría económica y la realidad económica demuestra que siempre el trabajador aporta un valor agregado al monto de la remuneración que recibe y en consecuencia resulta claro indicador de la capacidad contributiva

del sujeto, yo me permito someter a la consideración de ustedes que en todo reporte de las acciones que se encuentran, de las empresas cuyas acciones se encuentran en la bolsa y que por ley deben presentar a sus accionistas siempre uno de los datos que anualmente presentan a los accionistas o personas interesadas en adquirir acciones, es el crecimiento de su plantilla laboral como una prueba de su éxito económico, en lo personal no puedo dejar de transmitirles mi testimonio de que durante mi pasada vida de abogado litigante, de abogado independiente, uno de los más claros indicadores del éxito económico de los diversos clientes que me distinguían con su confianza era precisamente el monto de las remuneraciones pagadas a su personal y esto destruye otra de las argumentaciones que se han hecho, a través de mayores prestaciones hay una mayor productividad y como obviamente un impuesto de la limitante presupuestal que tiene este 2% no podría llegar a reformar esta realidad que vivimos cotidianamente cuando se alude a las teorías económicas siempre ^{son} nos surge la inquietud de si ~~estas~~ teorías/correctas o incorrectas, normalmente ante un fenómeno se consulta a dos economistas y cada uno da una solución distinta y la tercera no dada es la que se da en la realidad, pero por ello precisamente hay que atender a las realidades, y en las realidades económicas encontramos predominantemente que la capacidad contributiva de un sujeto puede ser constitucional y justamente medida por el monto de las remuneraciones que paga a sus trabajadores, no es posible que lleguemos al formulismo de considerar que porque el ingreso si respeta el principio

de proporcionalidad. Si yo tengo 10 trabajadores y a cada uno de ellos le pago cinco millones y cada uno de ellos si tenga capacidad contributiva y en cambio yo que pague cincuenta millones mensuales no tenga capacidad contributiva, yo puedo estar cometiendo -- errores administrativos que me lleven a la ruina, por tener ese conjunto de trabajadores es obvio que el ingreso es un indicador también de la capacidad contributiva y así lo ha reconocido la Suprema Corte pero no es el único ni es el único en nuestro sistema impositivo que tiene como ya lo he dicho diversos indicadores económicos que han sido considerados constitucionales por este Alto Tribunal, en tal virtud sin dejar de reconocer que el grave motivo de preocupación de este Pleno la precisión del principio de proporcionalidad y de sus alcances y de sus matices, lo que en este asunto no se logra porque la naturaleza misma -- económica del indicador seleccionado como hecho imponible por el legislador ordinario es correcta y prueba la capacidad contributiva del sujeto, pero debemos reconocer que lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido con relación a impuestos en concreto y datos en concreto relativa a ciertos impuestos no pueden pretender ser aplicados en forma general a todo el sistema impositivo toda vez que cada uno de los impuestos tiene su propia estructura jurídica y económica, en consecuencia la aplicación de los principios de proporcionalidad y equidad tendrán que ser matizados y estudiados de conformidad a esta naturaleza jurídica y económica del impuesto correspondiente; en la especie para terminar es mi opinión que el monto de las remuneraciones pagadas por servicios personales es --

claramente un indicador de la capacidad contributiva del sujeto y que no tenemos base constitucional alguna para seguir la propuesta presentada por el señor - Ministro Ponente en el sentido de exigir que esa relación entre el hecho imponible y la capacidad contributiva del sujeto del impuesto tenga que ser necesariamente unívoca y directa sin que deba ser tomada en los términos en que la realidad jurídica y económica nos permita interpretar.

EL M. PRESIDENTE.- El señor Ministro Schmill ha pedido la palabra, pero antes de que haga usted uso de la palabra me permita hacer una pequeña observación, para ver si la acepta o no, como usted - podrá ver, el señor Juez de Distrito en la página 30 y 31 sobresee en parte y niega en la página 87, usted considera que es ajeno a la revisión por no ser impugnado por el recurrente, el sobreseimiento sin embargo en los puntos resolutivos habla usted de la materia de la revisión y después repite el punto resolutivo, considero que en todo caso debe de decir: "En la materia de la revisión..." etc. 35c., quitar el segundo y el tercero pasa a ser el segundo.

SIGUE TERCER TURNO.

TRIBUNAL EN PLENO
23 MAYO 1989

TERCER TURNO 1a.P.
SANTIAGO - LIMA

EL M. SCHMILL O.- Gracias señor Presidente. Si, si tiene usted razón de hacer esas observaciones, acepto la proposición de quitar el segundo punto - resolutivo y el tercero convertirlo en segundo.

EL M. PRESIDENTE.- Muchas gracias.

EL M. SCHMILL O.- La intervención del señor Ministro Salvador Rocha Díaz, me resulta especialmente interesante, toda vez que son problemas fundamentales y que se trata de mi proyecto y con toda claridad y sinceridad expresa los puntos insuficientes. Me alegra mucho que esté de acuerdo con la forma y como el - proyecto parta del punto sobre el principio de legalidad y sobre el principio de equidad, pero que no tiene objeción a la forma en que el proyecto se analiza y se desarrolla el estudio de estos conceptos de violación. Sin embargo, el señor Ministro Rocha difiere y difiere radicalmente de la proposición que tiene del estudio a discusión en relación con el principio de proporcionalidad, está establecido como una de las limitaciones a la facultad legislativa por el artículo 31 fracción - IV, de la Constitución; yo comparto con él las afirmaciones en el sentido de que la Constitución de México - no proporciona un criterio específico, claro, una definición de estos conceptos, simplemente establece que - los mexicanos están obligados a contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Ha sido la función y la labor de la Suprema Corte de Justicia el dar contenido a estos dos conceptos de proporcionalidad y equidad e igualmente al -

TRIBUNAL EN PLENO
23 MAYO 1989

TERCER TURNO 1a.P.
SANTIAGO - LIMA

principio de legalidad que está consignado en la frase de la manera que proporcional y equitativa dispongan - las leyes, que son los tres requisitos fundamentales - que establece la constitución en relación con la posibilidad de establecer contribuciones a los mexicanos.

La Suprema Corte de Justicia ha intentado en varias jurisprudencias definir esos conceptos - de proporcionalidad y equidad y creo que ha tenido éxito en estas definiciones que han constituido jurisprudencia; el principio de equidad ha sido establecido - claramente y el principio de proporcionalidad ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia, estableciendo una relación entre el monto del tributo y los - elementos correlativos del tributo que es el objeto, la base, etc., con la capacidad contributiva o la capacidad económica del contribuyente, y esto fue especialmente analizado en materia del Impuesto sobre la Renta, en donde por cierto se afirmó que este principio de - proporcionalidad, se cumplía precisamente estableciendo tarifas progresivas conforme la capacidad del contribuyente, era valor, por tanto, debía contribuir proporcionalmente más, quien tenía mayor capacidad contributiva y proporcionalmente menos, quien tenía menor - capacidad contributiva; pero esto fue establecido como lo dije, en materia del Impuesto sobre la Renta, no en relación con los impuestos indirectos, en donde evidentemente no se ve la capacidad económica total de un sujeto que va a ser contribuyente; esta capacidad económica total se ve fundamentalmente en el Impuesto sobre la Renta, en donde la totalidad de los ingresos o casi

TRIBUNAL EN PLENO
23 MAYO 1989

TERCER TURNO 1a.P.
SANTIAGO - LIMA

la totalidad de los ingresos son acumulables para las personas físicas y con base en estos ingresos acumulables, se establece una tarifa que tiene el carácter progresivo. En los impuestos indirectos no es posible establecer esta tesis de modo tan tajante, sino que deben hacerse matizaciones, porque en estos impuestos indirectos, solamente se contemplan secciones de la capacidad contributiva, pero hasta el año pasado, en principio, se ha establecido que el objeto del impuesto pueden ser, ya sean los ingresos, ya sean los actos jurídicos, actividades, situaciones específicas, y se había establecido un impuesto del 1%, cuyo propósito fue para la educación, y después se estableció en relación con las erogaciones por la remuneración al trabajo personal — prestado bajo la dirección y dependencia del patrón, — que tiene carácter federal.

El año pasado en el Distrito Federal se estableció este impuesto sobre nóminas del 2% y se ha discutido si es proporcional; yo me he decidido a presentar a ustedes un estudio, un proyecto, en el que considero que el impuesto es inconstitucional, porque en mi opinión, viola el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución; creo que el principio de legalidad y equidad, están perfectamente respetados por este impuesto sobre nóminas, pero el principio de proporcionalidad nó, porque considero que este principio de proporcionalidad es violado por el impuesto de nóminas del 2% en el Distrito Federal, si se analiza la relación existente entre el objeto del impuesto y la capacidad económica del

TRIBUNAL EN PLENO
23 MAYO 1989

TERCER TURNO 1a. P.
SANTIAGO - LIMA

sujeto que va a estar obligado a pagar, se verá que no existe una relación como lo mencionó el Ministro Rocha de carácter directo y unívoco, porque el Ministro Rocha parece partir del siguiente supuesto: si alguien tiene el dinero suficiente para pagar los sueldos y salarios de sus trabajadores, es que tiene la capacidad económica para hacerlo, parece un dato indubitable; sin embargo, no necesariamente el tener el numerario para pagar los sueldos y salarios implica capacidad económica, - porque hay una gran cantidad de casos, en donde se puede señalar que sin existir capacidad económica, hay necesidad de pagar estos sueldos y salarios;

(SIGUE TERCER TURNO 2a.P.)

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

...en principio todas las empresas en pérdida o que tienen erogaciones mayores que sus ingresos están - en esta situación, no es extraño observar cantidad- de empresas que atienden a sus obligaciones de carác- ter patronal acudiendo a préstamos que exclusivamen- te incrementan sus deudas y esta recepción de prés- tamos no puede considerarse como incremento a su ca- pacidad económica, puede ser que esto mismo lo esté destruyendo, puede incluso llegar a caer en quiebra por este motivo, asimismo tampoco existe la relación directa que yo estoy exigiendo en este proyecto, -- porque no necesariamente el que tiene mayor número de trabajadores tanto contribuirá con mayor cantidad - de impuesto tiene más capacidad económica del que - tiene menor número de trabajadores, hay empresas -- con un número menor de trabajadores y que tienen -- una capacidad económica muy grande y poder contri- buir altamente, y empresas con un gran número de -- trabajadores poco tipificado la empresa y que con- tribuye altamente a este impuesto, es mas las empre- sas denominadas holding o empresas controladoras, - generalmente no tienen trabajadores o tienen unos - muy pocos trabajadores que se encargan exclusivamen- te de la contabilidad y dicen que pagan muy poco im- puesto sobre nómina y sin embargo tienen toda la ca- pacidad económica del grupo de la cual ella es la - empresa controladora, es decir, hay una serie de -- ejemplos y de situaciones que demuestran que el ob- jeto del impuesto, las erogaciones por remuneración al trabajo personal no se encuentra de una manera - directa unívoca relacionada con la capacidad contri- butiva, con la capacidad económica del contribuyen- te, parece ser que según afirmación del señor minis-

tro Rocha, que esta relación entre el objeto de este impuesto y la capacidad económica, si es directa y unívoca y afirma que si es directa y unívoca porque el patrón lo recibe, el trabajo, el servicio del trabajador, y parte del supuesto que todo trabajo necesariamente crea valor, crea riqueza, consecuentemente todo receptor de un servicio personal subordinado es una persona con una gran capacidad económica y entre mayor cantidad de servicio reciba, o sea el receptor del trabajo subordinado, más rico será y mayor capacidad económica tendrá; por eso dice él, se justifica el pago del impuesto y hay una razón directa y unívoca entre la capacidad contributiva del que recibe este servicio y el monto del impuesto; yo pongo en duda estos supuestos fundamentales del señor ministro Rocha, yo creo que el trabajo no necesariamente aporta valor, el trabajo es meramente un insumo dentro del proceso de reproducción y puede haber mucho trabajo sin producción de ningún valor, la transformación que sufre la materia con motivo del concepto del trabajo, por la prestación de servicios, simplemente pueden no ser enajenados los objetos o pueden no ser remunerados la prestación del servicio, siendo meramente un insumo dentro del proceso de producción la empresa o la sociedad que intenten enajenar los productos derivados de este trabajo y no sea posible hacerlo porque no haya demanda de ellos, que dará en una situación de una ínfima capacidad económica o una nula capacidad económica, por más que sea la receptora de una gran cantidad de servicios subordinados; creo yo que esta suposición, que esta presunción de que por el hecho de que se recibe o el he

cho de ser el receptor de servicios personales subordinados se tiene capacidad económica, la capacidad económica depende no de la cantidad de servicios recibidos, sino precisamente de las leyes de la oferta y la demanda. Por tanto yo no creo que exista esta relación directa y unívoca entre el objeto del impuesto y la capacidad económica del contribuyente, como hay excepciones conforme a estos ejemplos que he puesto, creo yo que por tanto claramente está demostrado que el principio de proporcionalidad está establecido en la constitución y se viola con este impuesto, porque contrariamente a lo que comunmente circula, yo no creo que la excepción confine a la regla, la excepción necesariamente refuta a la regla, consecuentemente si se encuentran excepciones a esta relación directa y unívoca al principio de proporcionalidad también se llegará a la conclusión de que este impuesto no cumple con el mismo y por tanto debe declararse inconstitucional por el concepto de supremacía de las empresas y por tanto, yo me permito sostener mi proyecto.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ: Quiero dar las razones por las que estoy en parte con el proyecto que está a consideración del pleno y la parte también en la que no lo estoy, en primer lugar yo estoy convencido creo que la constitución al imponer en su artículo 31 fracción IV una obligación de contribuir al gasto público por todos los mexicanos impone al estado una obligación de que esas contribuciones sean proporcionales equitativas, al respecto se ha dicho que la proporcionalidad se re

fiere a que pague más impuesto quién más tiene que -
aquel que menos tiene pague menos, inclusive con ba-
se en este principio es aceptado plenamente que la -
obligación de contribuir a los gastos públicos se --
vea exceptuada por aquellas personas de muy escasos-
recursos.

SIGUE EN EL CUARTO TURNO.

primera parte.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

- 1 -

.... aquí inclusive se debe tomar en cuenta la otra limitación constitucional de que los impuestos sean equitativos, es decir, que no sea sólo la expresión precisa y dura de la Ley, sino que debe imperar la justicia y la equidad, es decir, las contribuciones deben crearse cobrando más a quien más tiene y menos a quien menos tiene, buscando una justicia contributiva.

En nuestro País existe un gobierno que se integra por tres poderes; a nosotros nos toca analizar, a la luz de la Constitución y de las leyes secundarias, si las normas tributarias son o no constitucionales; como el Constituyente no limitó las fuentes impositivas, estamos obligados a estudiar cualquier gravamen instituido por el legislador, tomando en cuenta, principalmente, la proporcionalidad y la equidad de la imposición.

Tradicionalmente se ha visto que los impuestos directos pueden ser en un principio los más justos, porque se conocen y se puede valorar la capacidad del contribuyente; también existe la gran ventaja en ese impuesto de que hay una gran dificultad y casi imposibilidad absoluta de trasladar la carga del impuesto; en cambio, en los impuestos indirectos, es fácil poder hacer que el impuesto incida en un tercero, del cual no se conoce ningún signo de su capacidad contributiva; por esto se ha buscado que al crear algún impuesto de esa naturaleza, que el objeto del gravamen pueda ser tal, que permita en una forma aproximada que la carga impositiva no vaya a ser regresiva, es decir, que el que menos tenga pague más impuesto.

Por ejemplo, los impuestos al gasto, por lo general tratan de diferenciar qué tipo de artículos satisfacen

- 2 -

una necesidad y qué son una necesidad básica; cuál es un consumo necesario no indispensable y los suntuarios o de lujo; en estos casos, en lo de los básicos, se supone participan en su consumo todos los contribuyentes de cualquier capacidad contributiva, de cualquier capacidad económica y por eso, como son los esenciales para la vida, se busca casi siempre que sean los menos gravados o estén exentos. En el caso de los segundos, o sea para satisfacer necesidades no indispensables, aquí ya se les aplica una tasa o tarifa diferencial más alta que en los primeros, porque se supone que son, los que van a pagar este impuesto, son aquellas personas que tienen o cuentan con un ingreso mayor, una potencialidad económica superior a los primeros. Y en tercer lugar, por ejemplo, a los de lujo o los suntuarios, se les aplican tasas o tarifas altas, porque se supone que los compran las personas con gran capacidad económica, o aquellas otras que, aún cuando no la tengan, quieren consumir esos artículos y deciden pagar ese impuesto alto.

En este caso del asunto que estamos discutiendo, del impuesto del dos por ciento sobre las nóminas, yo siento que debemos hacer una distinción en cuanto al concepto "gasto"; efectivamente hay gastos impuestos al gasto que son aceptados y que se han declarado constitucionales por esta Suprema Corte, pero que son aquellos en donde perfectamente o con cierta facilidad, se ha podido determinar quiénes son los sujetos últimos del impuesto, cuál es la capacidad económica o contributiva que los mismos tienen; en cambio, en este impuesto que estamos viendo, que decimos: "impuesto también al gasto", pues este gasto, esta erogación que hacen los patrones, para mí no es un gasto como el primero que acabamos de definir y que pudiéramos con facilidad señalar cuál es la capacidad contributiva o económica de los impuestos;

25

- 3 -

es
aquí está/la adquisición, la compra, la inversión de una
equiva cantidad de dinero para retribuir, remunerar el --
salario y que nos lleva, en última instancia, a llevar a
cabo en un final, obtener utilidades, pero no necesaria-
mente nos está demostrado que la erogación sea una noción
directa de capacidad económica del contribuyente, como de-
cía el señor Ministro Schall, hay muchos, innumerables ca-
sos que no podemos definir con precisión si esa empresa --
está quebrada, si esa empresa no tiene utilidades, si esa
empresa inclusive está utilizando el crédito para remunere-
rar a sus trabajadores; entonces no es fácil el definir en
lo general, además yo siento que en estos casos, por un --
lado, indudablemente que está la empresa o la persona fí-
sica dedicada a cuidados empresariales, que remunera a --
sus trabajadores en su salario, la que está obligada direc-
tamente; no podemos identificar sus capacidades económi-
cas, pero inclusive podríamos suponer que ese impuesto a
la empresa lo puede repercutir y entonces vamos a descono-
cer totalmente, peor, todavía, quienes van a ser los últi-
mos recipientes del impuesto, o sea, la incidencia del ---
impuesto se va a desconocer...

- - - - -

(SIGUE 2a. PTE. CUARTO TURNO.)

...En el caso actual de México, tal vez con los sistemas económicos o pacto económico que llevamos en México por -- año y medio, para buscar evitar la crisis que nos agobiaba por varios años, se han congelado, se han fijado precios -- con el fin de tratar de controlar la inflación; y, con el fin se han congelado inclusive también remuneraciones y muchos otros elementos con fin de contrarestar ese efecto -- tan nocivo de la inflación que para algunos estudiosos de la materia impositiva han dicho que es el impuesto mas injusto que puede existir en una sociedad. Aquí se ve la política positiva de nuestro gobierno para evitar ese impuesto tan nocivo como es la inflación; pero si volvemos al caso concreto, entonces si nos damos cuenta de que no se puede definir si las empresas, personas físicas o morales, -- que estan obligadas al tributo tenga ni siquiera signos de riqueza, porque esos signos de riqueza son muy relativos, -- si en un momento dado la empresa está en situación económica difícil, está tratando de salir adelante; y, sobre todo como se ha dicho, aquellas empresas que tienen mas mano de obra, que de acuerdo con ese problema económico que estamos viviendo debe ser sano, inclusive, si vemos el artículo 25 de nuestra Constitución, nos damos cuenta que el -- constituyente permanente considera que debemos preservar y alentar la utilización del empleo; con este impuesto estamos yendo en contra de este principio general que nos dice, que aquellos patronos que tienen muchos trabajadores y que pagan mucho impuestos y que no tienen ninguna relación del pago del trabajo con la posible utilidad final que puedan ellos tener, tal vez van a tratar de reducir su mano de -- obra, la remuneración al trabajo personal y, en vez de propiciar este impuesto la utilización de más mano de obra, -- de evitar el desempleo, esta yendo en contra de ese desempleo, está incrementando ese desempleo; por otro lado, el-

- 2 -

mismo artículo 25 de nuestra constitución, dice: ...que se debe buscar una mejor redistribución del ingreso y la riqueza, entonces los impuestos para mí tienen una serie de elementos extra-fiscales muy importantes que no solo es la recaudación, sino los elementos extra-fiscales y, que ahora están, inclusive ya vigilados por nuestra Carta Magna es de que exista en los impuestos la posibilidad de una mejor redistribución del ingreso y de la riqueza y de que se fomenten las actividades económicas que se trate de evitar el desempleo que se aliente el empleo productivo en una serie de principios que son muy importantes y que muchas veces los impuestos, afectan en forma positiva, o negativa esta situación. No quiero cansarlos, en principio estoy de acuerdo con lo desarrollado en la parte final del proyecto del Ministro Schmill con otros, tal vez concesiones pero si no estoy de acuerdo con lo que él señale sobre el objeto del impuesto, yo sí creo que sea un principio de legalidad, yo sí creo, estoy convencido que el objeto de un impuesto debe estar perfectamente definido por el legislador, no hay posibilidades de que el objeto simplemente se enuncie en una ley impositiva y se deje a la interpretación de las autoridades administradoras de los impuestos para que ellas definan si el salario a que nos estamos refiriendo es el salario remunerador, es el salario que solamente se refiere a los pagos por el trabajo personal, o se incluyen algunas otras prestaciones, ayudas que se dan a los trabajadores, etc., para mí el objeto del impuesto, debe ser muy claro y no dejarse a la interpretación de las autoridades administrativas, administradoras del impuesto.

También no estoy de acuerdo en cuanto hace al aspecto de que las tarifas deberían de ser en estos casos-

- 3 -

para que fueran más proporcionales, o fueran proporcionales; que las tarifas debieran ser necesariamente progresivas, yo sí creo que realmente la tarifa progresiva, deba ser en todo caso, en aquellos impuestos finales; y yo, me referiría por ejemplo; al impuesto sobre la renta, pero al ingreso global de las personas físicas, por que inclusive en otros aspectos de los impuestos sobre los impuestos sobre la renta sí estoy de acuerdo en que como son etapas de la producción, se cobren tarifas proporcionales, tales como el de las empresas al impuesto de las actividades empresariales que a ellas se les cobra una tarifa proporcional y también al reparto de utilidades que también se hace en una forma proporcional - del impuesto respectivo.

- - - - -

(CONTINUA QUINTO TURNO)

...y también al reporter utilidades, que también se hace en forma proporcional al impuesto respectivo.

EL M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro Rocha Díaz.

EL M. ROCHA DIAZ: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero felicitar al señor Ministro Schmill, que yo no he aceptado que el principio de proporcionalidad requiera una relación directa y unívoca entre el hecho imponible y la capacidad contributiva del sujeto, simplemente he manifestado que eso es lo que él no propone, pero que yo no estoy de acuerdo con ello, y luego propone que como una aportación personal que considere indiscutiblemente la adecuada en debida protección de los intereses del contribuyente, pero que él reconoce, aunque tácitamente, que esta relación directa y unívoca no la exige el texto constitucional, sino que es una aportación que él presenta a la consideración de este honorable Pleno, para darle una mayor proporción al principio de proporcionalidad. Siendo esto así, es obvio que su propuesta tiene los argumentos que él expone en su proyecto, de los cuales discorpo, porque básicamente son argumentos fundados en situaciones de excepción, situaciones de excepción que podríamos dividir en dos grandes grupos: por una parte, aquellas situaciones de excepción, en donde claramente hay un error administrativo del padrón, contra todo personal en exceso, resulta que a ese personal lo dedicó a producir artículos que no tiene demanda, y todas estas excepciones irían en contra general del derecho, que dice, "nadie podría alegar el fundamento de su derecho por su negligencia", yo voy a decir que el impuesto no satisface el principio de proporcionalidad, porque cometo una serie de negligencias

económicas y en consecuencia lo que pago de salarios, no revela la capacidad contributiva porque resulta que pierdo, es ir en contra de la Constitución, yo voy a vender los productos abajo del costo, pues vuelvo a perder, tampoco sería un indicador. Yo creo que lo que el señor Ministro Schmill plantea, y voy a reconocer que él no confunde capacidad contributiva con renta, como suele suceder con frecuencia entre los diversos asajados de los múltiples emperes que han sido presentados, él no confunde, pero al llegar a definir capacidad contributiva con una posibilidad real y unívoca, sin excepción de poder pagar el impuesto, o sea riqueza existente y generada para poderla destinar al pago del impuesto, pues tiende a crear esa confusión, y aquí debemos distinguir en el conjunto de los impuestos que integran nuestro sistema fiscal. El señor ministro Schmill reconoce que un sistema fiscal requiere de contribuciones directas e indirectas, llámense reales, personales, intermedias o finales, pero pues esto está reconocido ampliamente por la doctrina de derecho tributario y nuestra Constitución de la facultad impositiva al legislador ordinario y no le señala sino ciertos limitantes a las que yo he aludido, pero en otros rubros sólo grave la utilidad o renta, en modo alguno le exige que solamente grave riqueza, simplemente exige que sea proporcional y equitativo y esta proporcionalidad que el señor Ministro Schmill así lo reconoce, debe ser analizada en relación a contribución en concreto, el principio de proporcionalidad no podría ser aplicado igualmente a diversos impuestos y menos con el mismo alcance a derechos o aportaciones de seguridad social, e inclusive puede tener marcos constitucionales generales distintos a los de los impuestos. En el caso de los im-

puestos indirectos, reales o intermedios se toma un fenómeno aislado de la vida económica que es naturalmente innecesariamente dinámica, y se toma ese hecho hecho aislado de la vida económica para ver si revela capacidad económica del sujeto y si la revela se selecciona como hecho imponible por el legislador ordinario, sin que encuentre limitación constitucional alguna para hacerlo, y así están establecidos los impuestos a los que se ha hecho alusión; cuando se trate de un impuesto final o personal, el impuesto al ingreso probable de las personas físicas es un impuesto final por excelencia, pues es obvio que allí sí la proporcionalidad está referida a la capacidad contributiva, que es unívoca e indirecta en este caso, ¿por qué? porque si a la suma total de mis ingresos en un sistema ideal con la posibilidad total de las deducciones que me corresponde hacer en función de mi vida ordinaria y a ese remanente, que es un remanente lo tomo como base del impuesto, pues ese momento la capacidad contributiva está necesariamente demostrada y hay una relación directa y unívoca, allí sí sin lugar a dudas, pero estaríamos pretendiendo aplicarle a un impuesto indirecto, real, intermedio, como se le quiera denominar, un principio que sería válido para un impuesto final o personal. Yo creo que si no se confunde la capacidad económica con utilidad, si se toma en cuenta que un sistema impositivo está integrado por diversas clases de impuestos que responden a distintos principios, que estos principios están matizados en función de la naturaleza jurídica, económica, social del propio hecho seleccionado, del hecho social seleccionado, como hipótesis normativa, tenemos que llegar a la conclusión de que el impuesto que estamos analizando es constitucional. Los

indicadores económicos así lo revelen, cuál es el porcentaje que en el producto interno bruto tiene el trabajo frente al capital, es un indicador claro de la justicia económica aunque esté prevaleciendo dentro de una determinada sociedad, es así porque reconocemos que es indicador, es porque reconocemos también que a su vez es riqueza, no es la riqueza final la utilidad obtenida por el sujeto o es la capacidad contributiva, con la capacidad de hacer esa selección establecida socialmente. Visto así, en consecuencia, no existiendo esa posibilidad de la confusión, las aportaciones que hace el señor ministro Schmitt son valiosas, podrán ser analizadas en relación con otro impuesto, precisar el alcance de proporcionalidad y equidad, en cuanto que empieza a resultar escasos hasta estos momentos elaborados en relación a la supremacía constitucional, pero no dejar por esto subsumido la superioridad del texto constitucional; pero un impuesto de naturaleza distintas del que estamos analizando en el presente caso, un impuesto real, intermedio, en donde el monto del impuesto son las remuneraciones pagadas por el subordinado de los servicios, en donde la capacidad contributiva esté reflejada por la posibilidad de hacer y por la realización cierta de esas erogaciones, no podremos aplicar este impuesto real, indirecto o intermedio y algunos principios, podrían ser valorados de otro modo, por un impuesto personal directo. No quisiera desviarme, aunque me gustaría responder a algunos de los planteamientos del señor ministro González Martínez, pero seguramente habrá alguna otra oportunidad en que podremos seguir argumentando sobre el asunto.

EL M. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro López Contreras.

EL M. LOPEZ CONTRERAS: Gracias, señor Presidente. Tengo un asunto que no se va a ver ahora, pero que en los fundamentos, o sea en el estudio de la proporcionalidad, llegué a la misma conclusión que el proyecto del señor Ministro Schmill Ordóñez, me siento obligado a decir unas cuantas palabras al respecto, porque yo coincido plenamente en sus tres aspectos con el proyecto que está a discusión, que es del señor Ministro Schmill Ordóñez, aspecto de legalidad, aspecto de equidad y el de proporcionalidad. Yo considero que en el sistema tributario mejicano no existe impedimento legal para que el legislador los ingresos, utilidades, la riqueza y las erogaciones, pues conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, la validez constitucional de un impuesto, sólo requiere la satisfacción de los requisitos consistentes, en primero, que se establezca en una ley, segundo, que sea proporcional y equitativo, tercero, que se destine al pago del gasto público, faltando uno de estos requisitos, el impuesto será inconstitucional.

En lo que atañe al principio de proporcionalidad tributaria, este Pleno ya tiene bien precisado en qué radica el principio de proporcionalidad tributaria, este Pleno ya había precisado en qué radica este principio y la forma de lograrlo en tratándose de gravámenes que inciden sobre ingresos, utilidades o rendimientos, quien recibe más debe pagar proporcionalmente más, lo mismo he hecho respecto a los impuestos que gravan la riqueza, quien tiene más debe contribuir en mayor cantidad,

o sea que en este tipo de tributos, el importe mayor o menor del impuesto a cubrir, está determinado por el volumen de los ingresos, utilidades o rendimientos que se obtengan, y por el valor de la riqueza que se posea.

Distinta situación se presenta cuando se trate de los impuestos que en última instancia, ya sea por vía de repercusión o por traslado, gravan ingresos, donde el principio de proporcionalidad a mi juicio, se ve satisfecho en cuanto se grave con mayor cantidad a quien gaste más, en razón de los mayores beneficios que obtiene al consumir mayor cantidad de bienes y servicios, que los que cubren menor cantidad por tales gastos, o sea que la mayor o menor cantidad que se pague por impuestos es proporcional al mayor o menor beneficio que recibe el contribuyente.

Ahora bien, el impuesto sobre nóminas, grave con el dos por ciento el pago de salarios que el patrón hace en cumplimiento de la obligación derivada de la relación obrero-patronal, de tal manera que quien pague mayor cantidad por concepto de salarios, cubrirá más impuestos que el que cubre menos salarios. Ello significa que dicho impuesto se desatiende, a mi juicio, del principio de proporcionalidad, pues el pago de salarios, lo único que revela es el cumplimiento de una obligación contractual, careciendo de una base lógica, que permita determinar que quien cubre más salarios se beneficia en mayor proporción, y que por tal razón lógicamente esté justificado que el primero debe pagar más por concepto de impuesto sobre nóminas que el segundo. Además, cabe destacar que de acuerdo con el criterio sustentado por este tribunal en Pleno, en las jurisprudencias, tesis jurisprudenciales números 48 y 130, visibles en las páginas 91 y 263,

respectivamente, de la primera parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, la mayor o menor cantidad que se pague por concepto de salarios o comisiones, no es indicativo de la capacidad contributiva del contribuyente, pero que se concluye que si el elemento básico para determinar la proporción en que el contribuyente debe cubrir el impuesto sobre nóminas, radica en que a mayor pago de salarios cubrirá más por concepto de impuestos, ese elemento carece de base de sustentación jurídica. Por lo tanto, el impuesto en cuestión, es desproporcional y por consiguiente resulta inconstitucional. Las tesis a que me refiero en la parte conducente, les leo los párrafos, dice lo siguiente: "Por otra parte, se falte a la proporcionalidad, porque el que se tenga trabajadores con salario mínimo o con salario mayor al mínimo, no es determinante de la capacidad económica". La otra tesis dice: "Al permitir el referido artículo 16 -se refiere el constitucional- la deducción de las erogaciones por concepto de comisiones, está reconociendo el principio técnico de que los gastos necesarios para el logro del objeto que constituye el hecho generador del impuesto, no son índice de capacidad contributiva". El beneficio o la utilidad que se derivan de ciertos hechos o actos humanos, son los que justifican que el gobernado tenga que sacrificar o ceder una porción de lo suyo para coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de la sociedad en que vive. En la época moderna, el tributo no equivale a una condena o castigo indiscriminado como en tiempos antiguos imponían los vencedores a los vencidos en las guerras de conquista, sino que es una carga de carácter social que se impone en reciprocidad y en pro

porción del provecho que represente e implica para el causante el hecho o acto generador del gravamen en sí mismo considerado. Este es, a mi juicio, la ratio juris de todas las contribuciones fiscales, de esta base hay que partir para instituir todo gravamen, en consecuencia, pienso que sólo puede gravarse lo que en sí mismo origina beneficio o utilidad en forma directa o indirecta, no cualquier situación o circunstancia del sujeto del sujeto pasivo es imponible, sino solamente lo que por se le reporta provecho o riqueza, si no hay beneficio, no debe haber carga impositiva, es inícuo gravar lo que no beneficia por sí mismo al contribuyente...

(Sigue sexto turno).

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

...el impuesto sobre nóminas grava una erogación, pago de sueldos o salarios que en sí misma no reporta beneficio o utilidad para el sujeto pasivo o pagador, tampoco reporta provecho por sí misma la prestación del trabajo que origina la erogación. En efecto, la prestación del trabajo personal subordinado sin la -- concurrencia de los demás factores o elementos de la industria y el comercio no es capaz de generar por sí mismo un provecho al patrón; el trabajo personal para ser -- útil en sentido económico debe contar con otros elementos como condición sine quanon para producirse en ganancia y, por lo mismo, para ser imponible. Suponiendo, -- sin conceder, que en lo general el sólo hecho de pagar -- salarios o sueldos en cuantía mayor o menor refleje capacidad contributiva o económica, sin embargo tal circunstancia no es ni puede ser un indicador seguro y definitivo de que la prestación del trabajo produzca utilidad al patrón. Los casos de los contribuyentes que obtienen -- grandes utilidades por usar alta tecnología y maquinaria moderna con pocos trabajadores o de los causantes que -- operan con pérdidas o cuya empresa estuvo inactiva por -- falta de materia prima, descompostura de la maquinaria o por caso fortuito, o bien, el caso de los empresarios -- que independientemente de sus ingresos pagan salarios -- más elevados y pagan mayores prestaciones laborales están demostrando claramente que la erogación mayor o menor por pago de salarios no son los que corresponden al beneficio o utilidad obtenida y ni siquiera a la capacidad contributiva o económica del objeto pasivo del impuesto. Por lo tanto, decir que el pago de salarios co-

no todo gasto egreso revela o significa riqueza, es a mi juicio, un sofisma, o sea, un razonamiento que induce al error de que exista relación directa entre la erogación y el beneficio obtenido por el trabajo que se paga, pues, como ya se dijo el pagar mayores cantidades por concepto de salarios no necesariamente conduce a tener mayores utilidades, más aún, el pago de salarios en las hipótesis de una empresa que se encuentra inmovilizada por algún motivo, no es consecuencia necesaria de la prestación del trabajo; es decir, se paga el salario aunque no se labore. En el caso concreto el sofisma consiste en partir de la base de que la erogación en sí misma o su causa determinante que es la prestación del trabajo genere riqueza y, por ende, haya que gravarla. Como resultado de lo anterior es claro que el impuesto, a mi juicio, es claro que el impuesto sobre nóminas atenta contra el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31 fracción IV constitucional, desde el momento en que grava erogaciones por concepto determinado de remuneraciones al trabajo personal subordinado que por sí mismo y en forma aislada no representa o implica beneficio a favor del contribuyente, sino que para ser útil en el sentido económico, el trabajo requiere de la concurrencia de otros elementos totalmente indispensables para producir bienes o servicios. En conclusión, el principio de justicia tributaria establecido en el artículo 31 fracción IV constitucional exige que todo gravamen sea proporcional en cuanto que corresponda al mayor o menor grado de beneficio, utilidad que el hecho imponible o su causa represente o que implique por sí misma para el contribuyente en forma directa o indirecta si el in-

puesto sobre nómina grave indiscriminadamente las erogaciones por concepto de salarios o sueldos desvinculando para ello, de manera absoluta a la prestación del trabajo personal subordinado causa de las erogaciones, de los demás elementos necesarios para la producción de bienes o servicios y sin atender, en modo alguno, al beneficio o provecho que aquella pueda reportar o significar por sí misma o al contribuyente. Entonces, el impuesto sobre nóminas es inconstitucional por apartarse del sentido lógico de la proporcionalidad que inspira el texto — del artículo 31 fracción IV de la ley fundamental. Por eso, yo votaré en su integridad, por el proyecto del señor Mtro. Ulises Schmill.

EL M. PRESIDENTE.— Con todo respeto, señor Ministro, yo creo que caemos en lo mismo de siempre. En esencia, lo que usted está sosteniendo es que nada más un impuesto a las utilidades o a las ganancias es constitucional, eso es el meollo de toda su exposición, y creo que ni siquiera el señor Mtro. Ponente — Schmill ha sustentado esa tesis. Aquí se trata de un impuesto al gasto que tienen que efectuar los que tienen — mano de obra, una relación laboral y no creo que eso tenga nada que ver con un impuesto a la utilidad o ganancia que pueda repercutir: son dos aspectos; eso ya lo dijo — el señor Mtro. Rocha en una de sus intervenciones, es — otro tipo de impuesto, impuesto indirecto, impuesto intermedio lo ha llamado él, no es el impuesto final como dije antes. ¿Está suficientemente discutido el proyecto?

Señores Ministros: debo entender —

que con excepción del señor Mtro. González Martínez, están conformes con el tratamiento que da el señor Mtro. Schmill a los conceptos de violación y a los agravios, hasta la página 97 en donde empieza el estudio del agravio que estima fundado el agravio. Podrán ustedes ver en el Considerando Sexto: "Por otra parte, se estima que es esencialmente fundado el agravio señalado con el número I, por los motivos que se expondrán a continuación: El artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República, establece que es obligación de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Acaba el señor Mtro. Schmill el estudio del agravio en la página 103, diciendo: "Ahora bien, tal situación infringe la garantía de proporcionalidad..."

¿Están dispuestos a votar?

LA MTRA. ADATO.- Sería más sencillo que nos concentráramos a determinar si estamos de acuerdo en lo que ha abordado el señor Mtro. Schmill en relación al principio de legalidad, al principio de equidad y reservar después una votación nominal para determinar quien vota con el proyecto y quien no, en relación al principio de proporcionalidad.

EL M. PRESIDENTE.- Eso es lo que acabo de hacer.

LA MTRA. ADATO.- Perdón.

EL M. PRESIDENTE.- Pregunté si estaban de acuerdo con el tratamiento, con todas las auto-

ridades que deberán englobar hasta el considerando sexto que trata de la proporcionalidad, si nadie se produce en contra, con excepción del señor Mtro. González Martínez que no está de acuerdo con el tratamiento que se da en ese aspecto a que el objeto del impuesto puede estar en otra norma; debo entender que nada más él vota en contra de ese aspecto del proyecto, y ahorita estamos viendo el considerando sexto donde aborda el estudio de la proporcionalidad el señor Mtro. Schmill, con lo cual quisiera yo ya recoger una votación nominal.

EL M. GONZALEZ MARTINEZ.- Señor Ministro: también me producía en contra de que no es el principio general, de que no se deben aplicar métodos progresivos para todos...

EL M. PRESIDENTE.- Eso no lo aborda el señor Mtro. Schmill.

EL M. SCHMILL.- En la foja 98 se afirma que la Corte había establecido que en el impuesto sobre la Renta la proporcionalidad está en relación con con las tarifas progresivas; pero, en ningún momento en mi ponencia sostengo yo eso.

EL M. PRESIDENTE.- Si estén conformes, se votará en ese sentido.

SEñor Secretario.- Recoja usted la votación.

EL M. DE SILVA NAVA.- En contra del proyecto. Por la negativa.

EL M. MAGANA.- En contra.

EL M. ALBA LEYVA.- Igual.

EL M. ROCHA DIAZ.- En contra.

EL M. AZUELA.- En contra.

EL M. CASTAÑON LEON.- En contra.

EL M. LÓPEZ CONTRERAS.- Con el proyecto.

EL M. FERNÁNDEZ DORLADO.- En contra del proyecto.

EL M. PAVÓN VASCONCELLOS.- En contra.

LA MTRA. ADATO G.- En contra.

EL M. MARTÍNEZ DELGADO.- En contra.

EL M. CARPIZO.- En contra.

EL M. GONZÁLEZ MARTÍNEZ.- Por la concesión del amparo, no de acuerdo en todas sus consideraciones.

EL M. VILLACORDOA.- En contra.

LA MTRA. MURRIETA LÓPEZ.- En contra.

EL M. SUÁREZ TORRES.- Con el proyecto.

EL M. CHAPITAL./ En contra y por la negativa del amparo.

EL M. DÍAZ ROMERO.- Yo voy a votar en contra; y quiero manifestar también que por lo avanzado de la hora, puedo decir que hay dos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están de acuerdo plenamente con lo expuesto por el señor Mtro. Rocha Díaz, sobre todo en la segunda intervención: son los amparos en revisión 1101/87 promovido por Vicente Morales Acosta, -- fallado el 18 de junio de 1988 por unanimidad de 21 -- votos; y el amparo en revisión 937/84 promovido por --

Compañía Química Americana y otros, fallado el 18 de agosto de 1988, también por unanimidad de votos. Por estas razones yo voto en contra del proyecto.

EL M. SCHMILL O.- Con el proyecto.

EL M. PRESIDENTE.- En contra.

EL C. SECRETARIO.- Hay mayoría de dieciséis votos en contra del proyecto.

EL M. PRESIDENTE.- EN CONSECUENCIA:. PRIMERO.- EN LA MATERIA DE LA REVISIÓN SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA.- SEGUNDO: LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A FRANCISCO DE ICAZA DUPOUR, CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSISTENTES EN LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, REFRENDO Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, DE FECHA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA TREINTA Y UNO DEL MISMO MES Y AÑO, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO AL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II, EN EL QUE SE ESTABLECIÓ EL "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS", EN SUS ARTÍCULOS 45-g, 45-h Y 45-i, DE LA LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, CONCRETAMENTE SU ARTÍCULO 1º. FRACCIÓN I, INCISO G) QUE SE REFIERE AL IMPUESTO ANTES MENCIONADO. NOTIFÍQUESE "..."